

2. Derechos de la Mujer y la Familia

Introducción

Distintas situaciones que afectan a la mujer en su condición y posición en la sociedad, y repercuten en familia y que llegan a conocimiento de esta Defensoría del Pueblo, nos impuso abordar las cuestiones de género con una mirada diferente.

El compromiso personal de la Defensora del Pueblo en la lucha por la defensa de los derechos de la mujeres, se alinea con la necesidad de una apertura en el tratamiento de las cuestiones de género en la sociedad.

Existe una creciente demanda ciudadana que tiene por protagonistas a las mujeres. A fines ilustrativos puede mencionarse que en esta Defensoría, en el período comprendido que abarca este Informe, un número de 1.035 presentaciones fueron realizadas por mujeres y 641 por varones.

Los desequilibrios de poder en cuestiones de género, afectan estructuralmente nuestra realidad y debe ser considerados como un factor determinante de las condiciones de vida de la población, y tenidos en cuenta en la formulación de leyes y política públicas: definición de programas, proyectos, etc.

Durante el mes de marzo integramos e Equipo Técnico conformado para la admisión de proyectos en la cuestión de género, que fueron puestos a consideración del Consejo Nacional de la Mujer y del B.I.D. De un total de 28 proyectos remitidos, fueron aprobadas 13 propuestas para implementar en distintas localidades de la provincia en temas tales como: Salud Reproductiva, Violencia, Capacidades Políticas, etc.

Salud Sexual y Reproductiva

Esta Defensoría comenzó una investigación **De oficio** ante una información periodística que daba cuenta de aumento de abortos provocados en la ciudad de Lamarque. Se trataba de adolescentes que recurrían a distintos métodos para interrumpir embarazos no deseados, lo que tomó estado público por declaraciones de la responsable de la Zona Sanitaria de Valle Medio.

Los pedidos de informes cursados al Ministerio de Educación y a la citada funcionaria, no fueron respondidos, sin embargo, del contacto establecido con la oficial responsable del trabajo con niños y jóvenes de la Comisaría de Choele Choel, supimos que se estaban realizando tareas conjuntas con áreas de salud y educación brindándose charlas informativas sobre violencia familiar y educación sexual en las escuelas.

Violencia familiar

La Defensoría del Pueblo ha derivado los casos de mujeres que denuncian violencia familiar a las Unidades Locales de Atención, creadas en el marco de la Ley N° 3.040 en las

localidades donde están funcionando y en su defecto a los hospitales, Juzgados de Paz o Centros de Atención a la Víctima del Delito dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ello así, pues el tratamiento de esta problemática merece la intervención de profesionales preparados para orientar y acompañar a las víctimas.

De la investigación acerca de la implementación de los procedimientos previstos en la Ley 3040, observamos que hay que mejorar la coordinación entre la Justicia y la administración, pues muchas veces la oferta de programas de contención familiar resulta insuficiente para acompañar las disposiciones de los Jueces (mediadas de asistencia a las víctimas, terapia psicológica al agresor, asistencia alimentaria al grupo familiar, etc)

Por otra parte, Informes a la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley 3040, son concluyentes en punto a las dificultades existentes en la conformación de las Unidades Ejecutoras Locales. Así se indicó que sólo se encuentran en funcionamiento las U.E.L. de Viedma, Ingeniero Huergo, Gral. Roca, Lamarque y Cinco Saltos, y en proceso de conformación en otras 15 localidades”.

Tampoco se ha constituido el Servicio de Violencia Familiar en Hospitales, el que sólo se ha creado en Viedma, dependiendo su implementación de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Deberá reforzarse la actuación de algunos Juzgados de Paz de pequeñas localidades en esta temática tan compleja. Sabemos que desde la UEP se está trabajando en la capacitación y orientación de estos funcionarios judiciales, frente al desafío que supone su intervención en casos críticos.

Finalmente, es menester destacar la importancia de la sensibilización, concientización y conformación de redes sociales para advertir, detectar, denunciar y acompañar a mujeres o familias víctimas de la violencia.

Violencia Sexual

La temática de la Violencia Sexual requiere un tratamiento austero y criterioso desde esta Defensoría del Pueblo, ya que en casos de presentaciones de mujeres que denuncien violación o abuso, el órgano encargado de iniciar las investigaciones correspondientes es el Poder Judicial.

Se cuestionó el lugar de detención de condenados por delitos sexuales, alojados en la instalaciones de la Ex Escuela EMETA en Gral. Roca por parte de familiares de las víctimas de esos delitos, quienes viven en proximidades de dicha unidad. Las condiciones de detención no ofrecían según los interesados, suficiente seguridad. Nuestra intervención ante las autoridades judiciales competentes, motivó que los detenidos fueran trasladados, dándose satisfacción al pedido de los ciudadanos.

También se recepcionó una presentación por ciudadanos / as que ejercen la prostitución en Viedma donde se denunciaba maltrato policial y se solicita la determinación de una zona segura para trabajar.

Así se dicta la **Resolución N° 548/03**¹ donde se resuelve correr traslado al Secretario de Seguridad y Justicia y solicitamos la intervención de la Comisión de Género de la Legislatura en la temática planteada. De tal pedido resultó la elaboración de un Informe sobre la Problemática de la Prostitución, sus aspectos legales y sociales en la actualidad

Dicho informe refleja la discusión entre la penalización de la prostitución y la reivindicación de las prostitutas como trabajadoras sexuales. Hace referencia también a las continuas denuncias que respecto a hechos de maltrato policial.

Finalmente propone se evalúe la reforma del Código Contravencional de Río Negro. Así, el tema fue remitido a la Subcomisión Mixta de Análisis de la Legislación Penal y de la Seguridad que funciona en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de acuerdo a las consideraciones vertidas en el Informe, lo que demuestra el compromiso del ámbito legislativo con la problemática presentada por las ciudadanas a esta Defensoría del Pueblo.

La Defensora del Pueblo manifestó que *“la propuesta sería entonces, embarcarnos en un proceso de reconstrucción social que tenga en cuenta las minorías, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el abandono de la actitud hipócrita de ocultar lo que está mal para aportar algo mas que criticas ante la aparición local de fenómenos mundiales, que requieren de un replanteo de la cuestión de la ciudadanía”*.-

Discriminación por Género

Sólo citaremos aquí, la presentación de un grupo de mujeres de Viedma que reclamaban por la No Discriminación por Género solicitando la eliminación del sexismo en el lenguaje y en las prácticas actuales, así como los sexismos en los textos jurídicos, la administración pública y la educación. Manifiestan la necesidad de eliminar la discriminación de género en los medios de comunicación a través de acuerdos en los que se promueva la equidad de género y no exacerben la violencia hacia las mujeres.

La Defensora del Pueblo dijo que *“...haciendo un recorrido a través de las intervenciones realizadas desde el trabajo cotidiano de esta Institución, estamos en un todo de acuerdo en trabajar para la eliminación del sexismo en el lenguaje, considerando este como un indicador de la existencia de actitudes sexistas en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, tanto en lo público como en lo privado, siendo revelador de los condicionamientos que existen para el efectivo ejercicio de mujeres y varones de una vida plena y un desarrollo del género en todas sus potencialidades”*.

Registro de Deudores Alimentarios

Las madres de niños y jóvenes cuyos padres incumplen en el pago de la Cuota Alimentaria y el Régimen de Visitas establecido judicialmente suelen concurrir a la Defensoría del Pueblo ante la insatisfacción del curso de los procesos judiciales.

¹ Ver Resolución N° 548/03 en el Apéndice

Una de las herramientas creadas a los fines de avanzar en el cumplimiento de pago de las Cuotas Alimentarias fue la sanción de la Ley 3475 que establece la creación de un Registro de Deudores Alimentarios. **Lamentablemente a la fecha no ha sido posible lograr su aplicación por incumplimiento de las autoridades responsables.**

Al respecto, mediante el dictado de la **Resolución N ° 923/03**² se procedió a Recomendar al Sr. Ministro de Coordinación que instrumente las acciones necesarias a los efectos de la reglamentación de dicho Registro. Asimismo, la Recomendación fue puesta en conocimiento de la Subsecretaría de Asistencia y Promoción Familiar y el Consejo Provincial de la Mujer, responsables por ley de su funcionamiento, y a la Comisión Especial de Tratamiento a la Problemática de Género de la Legislatura.

La Subsecretaria de Asistencia y Promoción Familiar responde, en lo sustancial, que se está trabajando en una propuesta que posibilite la implementación del Registro, en el ámbito del actual Registro de la Propiedad Inmueble, por sus similitudes operativas.

Por su parte, el Sr. Ministro de Coordinación nos remite copia en la que consta la orden de reenvío del Expediente 56560-DGA-SLTyAL/2002 en el que se tramita la reglamentación para la implementación del Registro de Deudores Alimentarios, al Ministerio de Salud y Desarrollo Social para que se defina posición al respecto.

Por ello, con fecha 21/10/2003 se emite la **Resolución N ° 1.402/03** donde se expresa *“...que debe tenerse por respondida la Recomendación reafirmando nuestra convicción del más irrestricto respeto a las Instituciones que dan vida a la democracia y que han sido creadas con atributos específicos, como lo es el CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER, procédase al archivo de las presentes actuaciones instando al Consejo Provincial de la Mujer proseguir en la lucha por una sociedad más igualitaria plasmando en la práctica lo que en teoría se garantiza”*.

Acceso gratuito a estudios de ADN

En el curso del presente año, se recepcionó un reclamo de similares características a otros planteados en años anteriores ante las dificultades para el acceso gratuito al estudio de ADN en los Juzgados de Cipolletti que, a diferencia de otras circunscripciones, exigen el pago de \$ 100 por gastos de traslado de la muestra a Buenos Aires.

Ello dio lugar, al dictado de la **Resolución N° 1.078/03**³ mediante la cual se procedió a poner en conocimiento de la situación al Superior Tribunal de Justicia, el que recientemente ha dado inicio a una investigación.

² Ver Resolución N ° 923/03 en el Apéndice.

³ Ver Resolución N° 1.078/03 en el Apéndice

Apéndice

RESOLUCION N° 548/03

Viedma , 25 de abril de 2003.-

VISTO: El expediente N° 2630/03 caratulado “ Identidad Reservada (Varias Firmas), S/ travestis y prostitutas cuestionan actuación policial”, y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. 01 se agrega una presentación de un grupo de personas que solicitan reserva de identidad, y manifiestan que:

- ejercen la prostitución en la localidad de Viedma;
- la Policía no las deja trabajar ni circular por las calles de la zona céntrica en las que habitualmente se encuentran y que en varias oportunidades habrían sufrido maltratos, burlas y tratos humillantes;
- a partir de ello, es en la Ruta N° 3 donde trabajan pero se sienten muy inseguras;
- al solicitar trabajar en una zona urbana donde puedan cuidarse mutuamente, el Director de Higiene de la Municipalidad de Viedma les habría dicho que no es decisión del Municipio asignarles zona de trabajo sino que ese es un tema policial.

Que a fs. 03, 04, 07 y 08 constan copias de publicaciones periodísticas de donde surge la siguiente información:

- las prostitutas y travestis se están organizando para formar un sindicato que las agrupe para integrarse a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (A.M.M.A.R.),
- volvieron a denunciar presiones de la Policía.
- se estarían reuniendo en el Concejo Deliberante de Viedma con la intención de que se trabaje en una norma que las incluya.

II

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2.756, “presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester...”.-

Que el cuestionamiento sobre la actuación policial en lo atinente a la denuncia de maltrato se encuentra comprendido en el ámbito de competencias de esta Institución (artículo 9° y concordantes de la Ley citada).

Que según el Art. 10 de la ley N° 2756, que establece el ámbito de las competencias para la actuación de la Defensora del pueblo, los municipios quedan fuera de la intervención de esta institución.

III

Que como primera medida de esta Defensoría del Pueblo, se pone en conocimiento del Secretario de Estado de Seguridad y Justicia el reclamo que bajo identidad reservada se hiciera ante esta Defensoría del Pueblo, solicitando se brinde informe sobre la actuación de la Policía en los hechos narrados, en especial en relación a la solicitud de asignación de un lugar para trabajar.

Que a fs. 15 obra respuesta del Jefe de Unidad de la Comisaría 34 de Viedma, quién informa:

- que el expediente tiene origen en las contravenciones que se les aplica a las prostitutas y travestis, que realizan su trabajo en zona céntrica, causan el malestar de los vecinos.
- las contravenciones efectuadas fueron por infringir lo establecido en el Título III, Capítulo III, Faltas Relativas a la Prevención de la decencia Pública, Artículo 58° de la Ley 532.
- ese control se debe a distintas quejas de vecinos que se sienten afectados por el accionar de las prostitutas y travestis.
- la Policía únicamente aplica lo normado en la citada Ley, quedando a otro organismo, según es opinión del Comisario Mario Oropel, Jefe de la Comisaria Primera, la facultad de otorgarle la zona adecuada.

Que en la respuesta que nos remitiera el Secretario de Seguridad y Justicia, no se hace mención a este grave aspecto de la denuncia de las trabajadoras sexuales, por lo que se le solicitará nuevamente a la mencionada Secretaría informe puntualmente respecto a los tratos y humillaciones que sufrirían prostitutas y travestis de parte del personal policial.

IV

Que del análisis de la queja que corre agregada a fs. 01 y anexas surge que el municipio no podría actuar en lo atinente a la determinación de una zona segura para las trabajadoras sexuales debido a que no existe legislación que regule sobre la materia.

Que no obstante la imposibilidad de intervenir en asuntos municipales, se le solicitará al Presidente del Concejo Deliberante que, en carácter de colaboración con la labor de esta Defensoría de Pueblo y con la ciudadanía, brinde informe sobre los siguientes puntos, a saber:

1. Si a su criterio, correspondería analizar la posibilidad de que se produzca el dictado de una norma que contemple la presente problemática.
2. Todo otro dato o aporte que estime conveniente.

V

Que así también, se pondrá en conocimiento de las presentes actuaciones a la Comisión de género de la Legislatura de río negro, para que se analice el aspecto del vacío de legislación que existe respecto a la temática planteada.

VI

Que la determinación de una “zona roja” ha sido causante de debates y discusiones en muchas ciudades del país, por lo que esta problemática, no debe considerarse menor por afectar sólo a una minoría.

Sin embargo el trabajo más antiguo del mundo ha adquirido características particulares durante el capitalismo donde el crecimiento de la prostitución en la ciudad es también una expresión de miseria social a escala continental: Diariamente jóvenes mujeres de todo el continente llegan al país para ejercer la prostitución. Mas de 4.000 dominicanas han sido importadas al patio trasero de la Argentina y en el 46% de los casos, se desconoce la vía de acceso a nuestro país (Pagina 12, 26/08/2000).

La proliferación callejera divide las reacciones de los ciudadanos. Pero la comercialización del sexo sigue dejando ganancias más allá del descontento de la población. Los vecinos invadidos por este comercio reclaman “zonas rojas” fuera de los domicilios. Otros opinan sobre la prohibición de la prostitución en los espacios públicos. Otros se limitan a regular la prostitución solo cuando esta se ejerce en el marco de un lugar específico para ello.

Que a sabiendas de que muchas veces, estos sectores minoritarios son objeto de críticas moralistas surgidas de prejuicios y sesgo sexista, sería conveniente tener en cuenta la necesidad de un análisis más profundo sobre este fenómeno social que se presenta como conflicto.

El aumento de la oferta de sexo en las calles supone la existencia necesaria de una demanda, que por supuesto, surge de la misma comunidad. La misma comunidad que luego condena moralmente a las trabajadoras y que bajo justificaciones legales o morales las maltrata, segrega y humilla. Castigar la oferta es seguir construyendo hábitos esquizofrénicos y valores hipócritas que niegan la realidad y no proponen, ante situaciones problemáticas mas que la salida de la prohibición, la ocultación, la exclusión.

Esto no significa hacer apología de la prostitución. Desde la lucha por los derechos humanos de las mujeres más que deseable sería la realidad de no tener a mujeres ofreciendo su cuerpo en condiciones humillantes por dinero, con riesgo de ser atacadas, de contraer enfermedades de transmisión sexual, de tener embarazos no deseados, etc. Si bien defender sus derechos implica procurar la posibilidad de una vida digna desarrollando sus capacidades y sus vínculos de formas menos riesgosas y más felices, estamos frente a una compleja trama de circunstancias que determina un fenómeno en el que grupos de mujeres y travestis están ejerciendo su derecho decidir a que hacer con su cuerpo y con su vida.

Travestis y prostitutas reclaman el derecho a trabajar en lo único que consiguen y denuncian brutalidad policial . Aunque la mayoría carece de estudios u oficios, muchos ingresan al negocio para pagar sus estudios, la “zona roja” será un viaje sin retorno, es el salto de la prostitución ocasional al oficio permanente.

En la Revista FEMPRESS Ana María Amado, a propósito del conflicto con las zonas rojas en la ciudad de Buenos Aires, manifiesta: “Las posiciones en debate sintetizan cuestiones nada desdeñables, como el juego de libertades personales y colectivas, o el alcance de las formas de control y vigilancia. La visibilidad urbana de travestis y prostitutas agrega en este sentido, signos sexuales y eróticos a la compleja trama histórica y cultural de la ciudad, que no suele tejerse sólo de leyes y códigos. “

El escenario actual que nos toca vivir en Viedma, ante la aparición de este grupo de mujeres, prostitutas y travestis, que se organizan y reclaman por sus derechos, muestra que el género puede configurar nuevos desafíos a nuestra sociedad.

La propuesta sería entonces, embarcarnos en un proceso de reconstrucción social que tenga en cuenta las minorías, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el abandono de la actitud hipócrita de ocultar lo que está mal para aportar algo mas que críticas ante la aparición local de fenómenos mundiales, que requieren de un replanteo de la cuestión de la ciudadanía.

Que en lo inmediato habría que responder por lo malos tratos de la policía, habría que definir una zona segura para las trabajadoras sexuales, habría que hacer algo a fin de asegurar a las prostitutas que trabajan en la calle el acceso a la salud y buscar programas que signifiquen, por los menos para las que trabajan por necesidad, la posibilidad de una alternativa a la prostitución callejera.

VII

Que en vista de la información surgida del relevamiento periodístico, surge que las promotoras de las presentes se estarían organizando hacia su objetivo por lo que pondremos en su conocimiento la presente resolución, quedando a su disposición para recepcionar todo nuevo elemento que se aporte a las presentes para consideración e informarle toda novedad que surja de estas investigaciones.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO R E S U E L V E :

PRIMERO: Avocarse al conocimiento de los aspectos de la queja que están encuadradas en el ámbito de las competencias de esta Defensoría del Pueblo.-

SEGUNDO: Correr un nuevo traslado al Secretario de Seguridad y Justicia, con el pedido de informes estipulado en el Considerando N° III de la presente resolución (art. 9 y 11 inc a de la ley 2756).-

TERCERO: Solicitar, en carácter de colaboración, al Concejo Deliberante de la Ciudad de Viedma, informes según lo explicitado en el Considerando N° IV de la presente.-

CUARTO: Poner en conocimiento de las presentes actuaciones a la Comisión de Género de la Legislatura, según lo fijado en el Considerando N° V.-

QUINTO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCION N° 923/03

Viedma, 10 de julio de 2003.-

VISTO: El Expediente N° 999/02”DPRN”, caratulado “.... S/ reclamo por cuota alimentaria,” y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. 01 consta la presentación de una ciudadana de la localidad de Lamarque que manifiesta:

- Que tiene tres hijos, no tiene trabajo y está separada del padre de sus hijos desde el mes de octubre de 1999.
- Que luego de haber iniciado juicio por alimentos obtuvo una sentencia firme a favor de sus hijos de depositar del 1 al 10 de cada mes la suma de \$700
- Que su ex conyuge incumple dicha sentencia.
- Que recurre a la Defensoría del Pueblo para solicitar colaboración para dar cumplimiento a las leyes que asisten a sus hijos, teniendo en cuenta que el ciudadano ostenta un cargo público en el orden Municipal.

II

Que se puso en conocimiento la presentación de la ciudadana al Consejo Provincial de la Mujer y a la Comisión de Género de la Legislatura. Así se le solicita a ambos organismos información sobre sus posibilidades de arbitrar los medios para dar cumplimiento a la Ley N° 3.475, que crea el Registro de Deudores Alimentarios y que en su Art. 9 establece: “*Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley*”.

III

Que a fs. 05 consta la nota enviada a la ciudadana donde puntualmente se le informa:

- Que la cuestión planteada escapa al ámbito de competencia de esta Defensoría del Pueblo.
- Que no obstante la falta de competencia se ha derivado su presentación a los organismos mencionados en el Considerando II.
- Asimismo se le remitió copia de la Ley N° 3.475, sugiriéndole que, mediante su abogado patrocinante analice la posibilidad de solicitar ante el Juez interviniente en la causa **la inclusión del deudor en el Registro de Deudores Alimentarios**.

IV

Que con fecha 02/08/2002 recepcionamos respuesta del Consejo Provincial de la Mujer que dice:

- Que desde ese organismo se realizaron gestiones ante el ex esposo de la Sra., quien ha manifestado que, de acuerdo al compromiso asumido viene dando cumplimiento al mismo, así como que ha puesto parte de sus bienes a disposición de la denunciante.
- Que para la inscripción de deudores de cuota alimentaria en el Registro, debe mediar una orden judicial. Y que en el presente caso los órganos competentes no fueron informados (Subsecretaria de Acción Social y Consejo Provincial de la Mujer).

V

Que puesta en conocimiento la ciudadana de lo actuado por esta Defensoría el Pueblo y de las respuestas obtenidas, la misma comunica que en octubre de 2002, por intermedio de su abogado, se requirió al Sr. Juez interviniente en la causa la inclusión del moroso en el Registro de Deudores Alimentarios sin haber obtenido hasta esa fecha satisfacción a su petitorio. También manifiesta que el padre de sus hijos continúa incumpliendo sus obligaciones alimentarias.

VI

Que el art. 1° de dicha Ley textualmente reza: *“Créase en el ámbito de la Provincia de Río Negro el Registro de Deudores Alimentarios que funcionará en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Subsecretaría de Asistencia y Promoción Familiar o el organismo que lo reemplace, en coordinación con el Consejo Provincial de la Mujer, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”*.

Que el art. 10 de la misma establece: *“La presente ley será reglamentada dentro de los treinta (30) días de promulgada.”*

Que se procedió a recabar información vía informal (consta en acta informativa interna a fs. 09) a la Subsecretaría de Promoción Familiar, a la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno y al Consejo Provincial de la Mujer, sobre la implementación del Registro de Deudores Alimentarios.

Que de lo investigado surgió que dicho **Registro aún no ha sido reglamentado lo que estaría impidiendo su implementación.**

VII

Que si bien somos conscientes que con la creación del Registro no se soluciona el problema del incumplimiento, ya que este tiene que ver con causas más profundas, creemos que constituye un paso importante.

La directora general del Registro de Deudores Alimentarios de la ciudad de Buenos Aires, Dra. Beatriz Rattenbach, manifestó que “el Registro cumple la función de crear una conciencia social sobre este problema, al mismo tiempo disuadir a los deudores”.

Que es innegable que la situación económica influyó en la morosidad alimentaria y que muchos progenitores están atravesando circunstancias laborales realmente difíciles pero esto no justifica que se sustraigan de sus obligaciones alimentarias. La obligación de hacerse cargo de los hijos va más allá de la situación económica y la misma corresponde a ambos padres.

VIII

Que el espíritu de la Ley suponía constituir un instrumento útil a los progenitores con hijos a cargo que luchan por los derechos de sus hijos, valiéndose de esa herramienta legal para obligar a los deudores al cumplimiento de la cuota alimentaria fijada en sentencia firme por autoridad judicial.

Que pasados dos años desde la promulgación de la ley citada y no habiendo aún el Poder Ejecutivo procedido a su reglamentación lleva a reflexionar acerca de la importancia dada al tratamiento de la temática.

Que la tardanza en la reglamentación, y por lo tanto en la implementación del mencionado Registro atenta contra los derechos mismos que el espíritu de la mencionada ley promueve.

IX

Que la invitación a los Municipios de la Provincia a adherir a la Ley N° 3.475 (Art. 9°) es parte fundamental para la efectividad en el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Esta cuestión también está pendiente hasta tanto se determine su implementación, habiendo manifestado la intención de adherir, el Municipio de la localidad de S.C. de Bariloche, publicado en el diario “La Mañana del Sur” con fecha 14/06/2002.

Por ello:

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:**

PRIMERO: RECOMENDAR al Ministro de Coordinación intervenga a los fines que se dicte la reglamentación de la Ley 3475.

SEGUNDO: Poner en conocimiento de la presente Resolución de Recomendación a la Subsecretaría de Acción Social, al Consejo Provincial de la Mujer, y a la Comisión de Género de la Legislatura de la Provincia de Río Negro.-

TERCERO: Notificar a la ciudadana promotora de estas actuaciones la presente Resolución de Recomendación.-

CUARTO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCIÓN N° 1078/03

Viedma, 8 de Septiembre de 2003.-

VISTO: El Expediente N° 3252/03 del Registro de esta Defensoría del Pueblo caratuladoS/ cobro por traslado de muestras de A.D.N. en juicio de filiación” y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. 01 consta la presentación de una ciudadana de la localidad de Cinco Saltos que manifiesta que ha iniciado juicio de filiación por su hija mayor, en el marco de lo cual se resuelve la realización de la prueba de A.D.N.-

Que a dicha prueba, a realizarse en el Hospital de Cipolletti debe acudir con una suma de \$100 para afrontar los gastos de transporte hacia Capital Federal que demanda el exámen pero que su situación económica no le permite afrontar dicho gasto. Agrega que se encuentra bajo el beneficio de litigar sin gastos.-

Que de averiguaciones previas así como de una consulta vía informal con la Defensora General de la ciudadana, Dra. Cristina Yapur (consta en acta informativa interna a fs. 04 y 05), que indica que el turno para el exámen de A.D.N. es para el 26/08/2003 y que efectivamente los ciudadanos tienen que acudir a la realización de la prueba con \$100, valor del transporte a Capital Federal, importe que la ciudadana manifiesta que no está en condiciones económicas de afrontar.

II

Que conforme prescribe el artículo 17º de la Ley Nº 2756, "... presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester...".

El art. 10 de la ley 2.756 establece que el ámbito de competencia del Defensor del Pueblo se circunscribe a la administración pública provincial de lo que surge, que la Defensora del Pueblo carece de competencia para entender en cuestiones derivadas de conflictos entre particulares que han sido puestos a consideración de la Justicia.-

Que, toda vez que se encuentra interviniendo en la cuestión el poder judicial, siendo irrevisable para el Defensor del Pueblo el accionar de este poder, corresponde DECLARAR LA FALTA COMPETENCIA de esta DEFENSORIA DEL PUEBLO (art. 16º, c) de la Ley Nº 2756) para actuar en esta denuncia, conforme lo preceptúan claramente los arts. 167 y ss. de la Constitución Provincial y 19 y 10 de la Ley 2756.-

III

Que la identidad es el derecho que mayor vinculación tiene con la vida, ya que en la medida en que se es, se puede ser reconocido como tal. La identidad es un derecho amplio y dinámico, no se limita a una esfera estática vinculada a la formalidad (nombre, apellido, edad, etc.), sino que es más complejo, incluye aspectos físicos, psíquicos, espirituales que junto con preceptos ideológicos, culturales y religiosos determinan que una persona sea quien es y no otra.

Que a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional se asegura el derecho a la identidad del menor y se establece que los Estados velarán por la aplicación de estos derechos. El art. 8 apartada 1. Sostiene: "*Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas*".

Que por su parte la prueba biológica que se presenta con mayor precisión para la determinación de la filiación es el estudio del ácido desoxirribonucleico (ADN). Siendo casi imposible que exista material genético coincidente entre una persona y el padre o madre alegado y que no exista efectivamente vínculo biológico entre ellos.

Que este estudio, por su complejidad, es sumamente costoso y los ciudadanos que lo peticionan ante los tribunales en muchos casos no pueden afrontar los gastos que el mismo representa.

Que por ello, existe un Convenio entre el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Facultad Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires que establece que la gastos de los estudios que se solicitan se fijan en \$200 y que estos corren

por cuenta a cargo de Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (Resolución N° 231 de fecha 19/07/1999, del S.T.J. de R.N.)

IV

Que no obstante la falta de competencia de esta Defensoría del Pueblo para intervenir en cuestiones presentadas ante el Poder Judicial, en función de la situación presentada por la ciudadana que cuenta con patrocinio jurídico gratuito pero debe afrontar el gasto de traslado de la muestra de extracción de sangre, se procedió a recabar por vía informal, datos al respecto.

Así, se estableció comunicación telefónica con distintas circunscripciones judiciales de la provincia, de lo que surge (datos que constan en actas informativas internas a fs. 12 y 13) que sólo en la Cuarta Circunscripción Judicial se le cobra a los ciudadanos un importe que ronda entre los \$100 y \$150 en concepto de traslado de las muestras de A.D.N., aún a las personas que cuentan con el Beneficio de Litigar Sin Gastos y por lo tanto, que tienen probadas dificultades económicas.

Que de lo actuado se podría inferir que, ante la solicitud de la realización de la muestra de ADN y aún gozando del beneficio de litigar sin gastos, existe trato diferencial de los ciudadanos de acuerdo a la circunscripción judicial a la que acudan.

Por ello,

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :**

PRIMERO: Declarar la falta de competencia para intervenir en el reclamo presentado a fs.01 y anexas (Art. 16 inc.a. ley 2756).-

SEGUNDO: Poner en conocimiento de la situación presentada al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y solicitar informe sobre lo resuelto y actuado según corresponda.-

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-
